

# LA APLICACION DE LA LEY 04 Y LA LIBERTAD ANTICIPADA DE LOS DETENIDOS

**Dra. Katia Murrieta**

## SUMARIO:

ANTECEDENTES.- ANALISIS DE LA LEY 04.- APLICACION DE LA MISMA.- EXCEPCIONES.- PROCEDIMIENTO.- ULTIMAS REFORMAS AL CODIGO DE EJECUCION DE PENAS Y REHABILITACION SOCIAL Y A LA LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y SICOTROPICAS.- OTRAS DISPOSICIONES: CREACION DE JUZGADOS Y TRIBUNALES ADICIONALES.- SANCION A LOS JUECES.- RECOMENDACIONES.-

## ANTECEDENTES

En el Ecuador existen 31 centros penitenciarios, con una población aproximada de 9.900 reclusos, de los cuales cerca de un 13% son mujeres. La mayoría está detenida acusada de haber cometido delitos de narcotráfico, en un promedio de más o menos el 49%. En el mal llamado centro de rehabilitación penitenciaria de Guayaquil, donde se encuentran hacinados 2.420 reclusos, el 36% está procesado por narcotráfico. Curiosamente, a pesar de que en Guayaquil, por ejemplo, en siete meses, hasta el 2 de agosto de 1997, según cifras publicadas por Diario El Universo, se habían producido 2.227 robos de vehículo, sólo había, hasta esa fecha, 27 detenidos por este delito, lo que no representa ni siquiera el 1%.

Interesante resulta destacar el motivo por el cual los detenidos se encuentran guardando prisión. De acuerdo con las cifras extraídas del mismo centro, las causas y números de detenidos son los siguientes:

### **Clasificación de Detenidos por Delitos**

Código Número		Tipo de Delito	Porcentaje
AA	14	ATENTATO AL PUDOR	0,57%
AI	16	APROPIACION INDEBIDA	0.66%
AL	6	ALIMENTOS	0.25%

AR	174	ASALTO Y ROBO	7.14%
AT	3	ACCIDENTE TRANSITO	0.12%
CD	19	CONSUMO DE DROGA	0.78%
DF	1	CONTRA LA FE PUBLICA	0.04%
ES	30	ESTAFA	1.23%
EV	2	EVASION INTERNO	0.08%
EX	5	EXTORSION	0.21%
FA	10	FALSIF. DE DOCUMENTOS	0.41%
FU	24	TENENCIA ILEG. ARMAS	0.98%
HO	199	HOMICIDIO	8.16.%
IN	2	INCENDIARIO	0.08%
IV	4	TENTATIVA VIOLACION	0.16%
LE	15	LESIONES	0.62%
MT	4	TRANSITO MUERTE	0.16%
N A	11	NARCOLAVADO	0.45%
PE	4	PECULADO	0.16%
PI	2	PIRATERIA	0.08%
PL	10	PLAGIO	0.41%
PU	2	TENT. PRECURSOR DROGA	0.08%
RO	333	ROBO AGRAVADO	13.66%
RV	15	ROBO VEHICULO	0.62%

Tuesday, July 15, 1997

Page 1 of 2

De todas estas personas, a nivel nacional, sólo el 40% ha recibido sentencia; el resto, el 60% forma parte del ejército de hacinados cuyos procesos sufren un cruel letargo. Tampoco pueden ser beneficiarios de rebajas de penas, tal como lo manda la ley, porque para ello es necesario que se haya determinado su condena mediante la respectiva sentencia. En lo que se refiere al centro penitenciario de Guayaquil -perdónenme que me resista a llamarlo por su nombre completo, anteponiendo la palabra rehabilitación- existen 2.121 presos sin sentencia. Sólo hay 299 sentenciados. Todas estas cifras, de acuerdo a datos proporcionados por el Comité de Internos del Centro de Rehabilitación Penitenciaria.

Nadie discute el derecho que tiene la sociedad de mantener en prisión a aquel que ha transgredido o vulnerado la norma penal, ocasionando un perjuicio material o personal. La sanción para quien se aparta de las reglas sociales al cometer una acción tipificada **en el ordenamien-**

to penal como delito es la prisión, cuyo tiempo es fijado de acuerdo a la naturaleza del acto y a la existencia de circunstancias agravantes o atenuantes. Pero la sanción no es más que eso, la prisión y por el período que corresponde de acuerdo a la ley penal.

Sin embargo, en nuestro medio, observamos que el individuo no sólo que es condenado al encarcelamiento, sino que también es víctima del medio penitenciario y condenado también a sufrir o padecer la prisión por tiempo indefinido o, en el mejor de los casos, a un lapso mucho mayor del que le correspondería según el delito cometido. No olvidemos que, por lo demás, también hay mucha gente inocente. Tampoco olvidemos que hay casos de gente que ha permanecido más de trece años encerrada acusada de haberse robado una gallina, sin que ni siquiera se haya comprobado que cometió tal robo, sin que la persona que lo denunció haya comparecido a reconocer su firma y rúbrica estampadas en la denuncia y sin que quien lo acusó se haya preocupado nunca más de que existe un proceso y, por esta causa, un ser humano tras las rejas.

Hay casos patéticos de injusticia, en los que si solamente los jueces tuviesen un poco de tiempo para detenerse a revisar los juicios concluirán rápidamente que el acusado debe ser puesto inmediatamente en libertad porque es imposible que el individuo haya cometido el delito, como el caso de aquel hombre que llevaba seis años detenidos por haber supuestamente arranchado una pulsera. Asómbrense, ustedes, el supuesto delincuente no es ni más ni menos que un manco y, por añadidura, sin piernas. Es decir que, no es suficiente miseria para un ser humano estar privado de sus medios motrices y de locomoción, sino que la sociedad, con todas sus injusticias, le tiene que agregar la prisión. Yo pregunto, ¿quiénes son más delincuentes? ¿Nosotros, los que estamos afuera, o los que están padeciendo injustamente adentro? ¿Cuál es la diferencia entre los unos y los otros? ¿No es, acaso, un atentado contra uno de lo más elementales derechos humanos, cual es la libertad? ¿No estamos, en consecuencia, ejerciendo una especie de agresión en contra de los demás? ¿Cuál es la diferencia? Solamente hay una. Lamentablemente, aquello de que la justicia sólo se ha hecho para los que visten poncho, continúa siendo una realidad. Aquí no se aplica la justicia para los criminales de cuello blanco. Para estos se han hecho las cárceles doradas, llámese Miami o cualquier otra ciudad del exterior. ¿Cuántos está detenidos por peculado? ¿Si el peculado es tan infracción penal como el robar un animal, por qué si los hay por lo segundo y no por lo primero?.

Pero, no solamente que el prolongado e innmercido encierro va aparejado a la sanción penal, sin que sea esto, desde luego, legal, sino que la prisión misma, a más de ser un elemento criminógeno de primer orden, provoca en el sujeto múltiples reacciones, de las cuales difícilmente se recupera. Mucha gente enloquece en la prisión. Comencemos por observar el grado de hacinamiento que se vive en los centros carcelarios. Nuestra legislación (Art. 512 Código Penal) contempla dos clases de regímenes, la prisión y la reclusión, que puede ser menor o mayor, y ésta, a su vez, puede ser ordinaria (de 4 a 8 años y de 8 a 12 años); extraordinaria (de 12 años, 1 día, a 16 años); y, especial, de 16 años 1 día a 25 años (Art. 53 Código Penal). Esta última ha sido aplicada por primera vez en el Ecuador hace poco, en contra de una persona acusada de narcotráfico. El primero, de acuerdo con el Art. 55 del Código Penal, significa que el individuo debe sufrir su pena en la cárcel; y, el segundo, que debe cumplirla en la penitenciaría. Pero en la práctica la diferencia se resume a lo siguiente: Quienes van al régimen carcelario están inhumanamente hacinados en un dormitorio común, que puede albergar hasta cuatrocientas personas; y, las del régimen penitenciario, van a los pabellones, donde existen celdas, que originariamente fueron concebidas para alojar a una sola persona; pero, que habiendo sido señalado, en su conjunto, como es el caso de la otrora llamada penitenciaría del litoral, para una capacidad de 800, contiene en su interior a más de tres mil. Se supone que las cárceles son cantonales y que los centros penitenciarios son para la región.

¿Cuáles son las consecuencias derivadas del hacinamiento y de la mezcla de individuos sanos, más o menos sanos, dañados, peligrosos e irrecuperables? En primer lugar, la atmósfera que se vive es de violencia y aquella persona que no es delincuente o que ha sido privado de la libertad acusada, por ejemplo, de haber girado un cheque sin provisión de fondos, se aterra al verse rodeada de todo tipo de sujetos, que pueden estar drogadas, borrachos, alucinados, alienados, desnudos, semidesnudos, sucios, malolientes, hambrientos, enfermos, desnutridos, con enfermedades infectocontagiosas, etc. El caos es tal que, si el procesado tiene un poco de dinero, es obligado a negociar para que lo coloquen en un lugar menos inseguro. ¿A esto podemos llamar justicia?

La comida es asquerosa e insuficiente, no existe una atención médica adecuada. Acabamos de descubrir a un dominicano, de apenas 29 años de edad, viviendo el fin de sus días en este infierno, porque su grado de tuberculosis era tal que se encontraba ya en etapa terminal. El Congreso

Nacional le concedió el indulto y pudo ir a dar el último adiós a sus familiares en República Dominicana. También pregunto si la condena por narcotráfico llevaba aparejada la muerte del sujeto y el contagio a los demás.

No obstante que el Art. 66 del Código Penal establece que el trabajo es obligatorio en los establecimientos destinados a reclusión y prisión correccional, sin embargo esta disposición no se cumple y tenemos a individuos en plena capacidad de producción condenados al ocio, con lo cual se convierten en una carga no sólo para la familia sino para el Estado.

Y el encarcelamiento no sólo que afecta a un solo individuo, sino que también conlleva la tragedia de toda una familia. El daño es moral, por la vergüenza que se sufre y por el dolor de los familiares de tener a un ser querido padeciendo la prisión y también es material porque pasa a ser mantenido. Esto en el caso de que tenga parientes que posean medios para subvenir a sus más elementales necesidades y cuando no se han olvidado del reo. No es infrecuente encontrar a internos cuyos familiares nunca los recuerdan.

Otro de los padecimientos del encarcelado, y que es desconocido totalmente por los jueces penales, es la sensación de angustia que se experimenta al ignorar el tiempo que permanecerá en prisión. Y mucho más frustrante para el sujeto es saber que cumplió con largueza la pena a la que habría sido condenado por el delito que cometió, pero que continúa en la cárcel porque el juez no dicta la sentencia respectiva, porque el sumario -que significa breve- es exactamente lo contrario de lo que la ley persigue con esta etapa. La prisión preventiva es en el Ecuador sinónimo de prisión indefinida. Los sumarios permanecen abiertos por larguísimos años, en una actitud que podemos calificarla, con el mote más benigno, de inhumana.

Frente a esta situación, se dictó en el año de 1992, la ley N° 04, que se publicó en el suplemento del R. O. N° 22, del 9 de septiembre del indicado año.

Los considerandos de la ley no pueden ser más elocuentes.

Veamos: "Que uno de los más graves problemas en la administración de justicia en el campo penal es el retardo en la resolución de las

causas, que hace que el índice de personas detenidas que no tienen sentencia llegue alrededor del 70%; Que esto causa tremendo hacinamiento en los centros de rehabilitación social, con todas las dañosas consecuencias que trae consigo; y, Que lo mencionado constituye gran atentado contra los derechos de las personas".

Por la indicada ley, se agregó dos artículos en el Capítulo III del Título IV del Código Penal, después del artículo 114, y se dictaron disposiciones relativas al descongestionamiento de las cárceles, como veremos más adelante.

**ANÁLISIS DE LA LEY.-** El primer artículo innumerado que se agrega dice lo siguiente: "Las personas que hubieren permanecido detenidas sin haber recibido auto **de sobreseimiento o de apertura al plenario** por un tiempo igual o mayor a la tercera parte de lo establecido en el Código Penal como pena máxima para el delito por el cual estuvieren encausadas, serán puestas **inmediatamente en libertad por el juez que conozca el proceso....**"

Aquí conviene decir que la primera etapa del proceso penal es el sumario, que se inicia con el auto cabeza de proceso, y que tiene por finalidad comprobar la existencia del delito e individualizar e identificar a sus autores, cómplices y encubridores. Esta etapa, de acuerdo con el Art. 228 CPP, está sujeta a plazos determinados en la misma ley, debiendo organizárselo en quince días, durante los cuales se practicarán los actos procesales determinados en el 215 CPP, es decir, comprobar la existencia del delito e identificar a los responsables; plazo que puede ser aumentado de acuerdo con las circunstancias previstas en la misma ley. Luego, viene una etapa intermedia, durante la cual el juez declarará concluido el sumario y ordenará que el acusador particular, si lo hubiere, tal como lo dispone el Art. 235 CPP, formalice su acusación. Con o sin esta formalización, el juez dispondrá que dictamine el Ministerio Público.

De acuerdo con el Art. 239 del Código de Procedimiento Penal, habiéndose formalizado la acusación o con el dictamen fiscal, tal como lo dispone el Art. 238, y habiendo oído al sindicado, quien tiene 6 días para contestar, o en su rebeldía, procederá a dictar auto de sobreseimiento o de apertura del plenario, según el caso.

El sobreseimiento, de acuerdo con el Art. 241 del Código de Procedimiento Penal, puede ser provisional del proceso y provisional del sindicado, definitivo del proceso y definitivo del procesado, provisio-

nal del proceso y definitivo del procesado. Este procede, al tenor de lo dispuesto por el Art. 242 CPP, cuando el juez considera que no se ha comprobado suficientemente la existencia del delito, o habiéndose probado su existencia no se hubiere identificado a los culpables, o no hubiere pruebas suficientes de la participación del sindicado; en cuyo caso se dictará auto de sobreseimiento provisional del proceso y del sindicado. El definitivo se da cuando, conforme lo dispone el artículo siguiente, el juez concluya que no se ha probado absolutamente la existencia de la infracción o si encuentra que han existido causas de justificación que eximan de responsabilidad al encausado. Y, si el juez, conforme al Art. 244, llega a la conclusión de que se ha comprobado la existencia del delito, pero no la responsabilidad del encausado, dictará auto de sobreseimiento provisional del proceso y definitivo del sindicado.

Pero, si el juez considera que se ha comprobado la existencia del delito, dice el Art. 253 CPP, y que además aparecen presunciones en cuanto a que el sindicado es autor, cómplice o encubridor de dicho delito, dictará auto declarando abierta la etapa plenaria y ordenará que el encausado nombre defensor dentro de dos días. Este es el auto de apertura del plenario al que se refiere la ley.

El segundo inciso del primer artículo innumerado dice lo siguiente: "De igual modo, las personas que hubieren permanecido detenidas sin haber recibido sentencia, por un tiempo igual o mayor a la mitad del establecido por el Código Penal como pena máxima por el delito por el cual estuvieren encausadas, serán puestas inmediatamente en libertad por el tribunal penal que conozca el proceso".

Mientras que en el caso anterior, el tiempo se lo computa respecto de la tercera parte, en el caso de no haber recibido sentencia, se establece que, para obtener la libertad, hace falta haber permanecido en prisión la mitad o más de la mitad del tiempo asignado como pena máxima para el delito por el cual estuviere procesada la persona.

**EXCEPCIONES:** Sin embargo, y considerándose al delito de narcotráfico como uno de los más lesivos a la humanidad, que generan daño no sólo a una persona en particular sino a toda una comunidad, el legislador quiso mantener al margen del beneficio de estas disposiciones a aquellos que hubiesen cometido esta clase de delitos. Así se desprende del inciso tercero del artículo que comentamos, que dice: "Se excluye de

estas disposiciones a los que estuvieren encausados por delitos sancionados por la ley sobre sustancias estupefacientes y sicotrópicas".

Esta disposición ha sido considerada inconstitucional por parte del Tribunal Constitucional, por discriminatoria, violatoria de la igualdad ante la ley y desconocedora del derecho de los ecuatorianos para gozar de igual protección, por lo que, mediante Resolución N° 119 - 1 - 97, publicada en el suplemento del R. O. N° 222, del 24 de diciembre de 1997, declaró su inconstitucionalidad por razones de fondo y suspendió los efectos de la misma.

Debemos recordar, además, que existe una gran cantidad de detenidos por tenencia de droga. La ley de la materia, en el Art. 65 castigaba al tenedor de droga para consumo con una pena máxima de prisión de 2 años. Nada más injusto, un drogadicto es un enfermo y como tal debe ser tratado, no como un delincuente; no debe arrojárselo a las fauces de la delincuencia ni tampoco acrecentar su adicción. En la práctica, hay mucha gente que está en la cárcel, porque han sido sorprendidos o han sido acusados de tener dos o tres cigarrillos de marihuana o 0,01 gramo de cocaína, que no significa necesariamente que sean traficantes, sino que han admitido que tenían la sustancia para su consumo. Sin embargo, la prisión va más allá de los dos años que manda la ley. Esta disposición del Art. 65 no concordaba en lógica con la contenida en los artículos 30 y 32 de la misma ley. De acuerdo con el Art. 30, aquellas personas que parezcan encontrarse bajo los efectos nocivos de alguna sustancia sujeta a fiscalización deben ser conducidas a un hospital psiquiátrico o centro asistencial. Pero, más terminante aún es la norma del Art. 32, ya que ésta prohíbe la detención de una persona por el hecho de parecer encontrarse bajo los efectos de sustancias sujetas a fiscalización. Es decir que la ley no sancionaba al consumidor, pero sí al tenedor de sustancias para su consumo.

Dicho de otro modo, si el adicto no estaba bajo los efectos de las sustancias, pero las tenía en su poder para su uso, debía ir detenido y ser condenado.

El Estado, a través de su Procurador General, el señor doctor Milton Alava Ormaza, quien presentó el proyecto de ley al Congreso Nacional, ha querido corregir esta anomalía. Así, se aprobó la ley que se publicó en el R. O. 173, del 15 de octubre de 1997, la cual reforma, entre otros, el Art. 105 de la ley de la materia, cuya parte final del segundo inciso



dice que los narcodependientes o consumidores de drogas que hubieren sido capturados en posesión de sustancia estupefacientes o sicotrópicas destinadas para su propio consumo deberán ser consideradas enfermas y sometidas a tratamientos de rehabilitación, confiriéndole, además, el legislador, efecto retroactivo. Como los jueces se negaban a aplicar, el Congreso Nacional interpretó la ley (R.O. 284, del 26.03.98).

Lo que se debió haber hecho es haber reformado el Art. 65 de la ley que comentamos, por ser en éste donde se impone la sanción. Por ello, al dictarse la ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado (R.O. 335, del 9.06.98) se derogó esta disposición.

Esta ley ha causado mucha polémica y hay quienes se oponen a su aplicación, porque están en contra de la despenalización del consumo de drogas. A futuro, no debería haber más encarcelados por esta razón, sino que, de ser sorprendidos por la policía, deberían ser trasladados a un centro de rehabilitación para drogadictos y no a ningún centro carcelario. En lo que se refiere a quienes ya están encarcelados, debería de realizarse un examen concienzudo no sólo de la personalidad del sujeto, su grado de adicción y de peligrosidad -lamentablemente, la prisión marca y causa daño, por lo que habría que establecer hasta qué punto el sujeto no es nocivo para la sociedad- sino también de su entorno familiar, social y laboral, para determinar hasta qué punto su familia está en condiciones de ayudarlo a rehabilitarse. No olvidemos que, según el grado de dependencia, hay personas que son capaces, incluso, de dar muerte a sus progenitores para conseguir dinero para adquirir la droga.

**PROCEDIMIENTO.-** La ley 04, que motiva este estudio, en el artículo segundo, establece el procedimiento a seguir para acogerse a sus beneficios. Aquí cumple un rol muy importante el director del establecimiento penitenciario y el control estadístico de los internos, sobre la fecha de ingreso, el estado de la causa, el delito del que se lo acusa, y el juzgado o tribunal bajo cuyas órdenes se encuentra.

El director del centro penitenciario donde se halla el detenido debe comunicar al juez o al tribunal respectivo, que el reo ha cumplido la parte de la pena establecida por la ley, al día siguiente de haberse producido este hecho. El juez o tribunal debe ordenar **inmediatamente** la libertad del **detenido**.

En caso de que la autoridad correspondiente hiciere caso omiso a esta comunicación, no es que se establece una sanción para el funcionario reuente a cumplir con la disposición legal, con lo cual no habríamos ganado nada, sino que, por el contrario, faculta **al director del centro de rehabilitación social** a poner en libertad al detenido, de manera inmediata, una vez que hayan transcurrido **veinticuatro horas** de haber dado el aviso.

El director del centro penitenciario está en la obligación, además, de informar al juez o tribunal correspondiente acerca de este hecho, así como a la Corte Superior del Distrito.

### **ULTIMAS REFORMAS AL CODIGO DE EJECUCION DE PENAS Y REHABILITACION SOCIAL Y A LA LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y SICOTROPICAS.**

En un afán de descongestionar los centros carcelarios y de evitar que una persona permanezca detenida por tiempo indefinido, ha poco se reformó también el Código de ejecución de Penas (R.O. N° 218, del 18.12.97) y se sustituyó el texto del Art. 37 del mismo por el siguiente: "Los directores de los centros de rehabilitación social y los directores de los centros de detención provisional, **no permitirán la internación de una persona sin la respectiva orden de detención en caso de investigación o de la boleta de encarcelamiento correspondiente**, expedida por autoridad competente, de conformidad con la ley, los mismos que serán penal, civil y administrativamente responsables por el incumplimiento **de la presente** disposición.- La persona que ingrese con orden de detención y contra quién no se haya emitido orden de prisión preventiva dentro de las 48 horas subsiguientes, **será inmediatamente puesta en libertad por el Director**, quien notificará de este hecho al juez respectivo...".

Esta disposición tiene su excepción en los casos relativos o infracciones relacionadas con el narcotráfico.

En el mismo Registro Oficial N° 218, del 18 de diciembre de 1997, se publicaron las reformas al Art. 122 de la ley de sustancias estupefacientes y sicotrópicas, por las cuales se sustituyó el inciso quinto y se agregaron dos incisos más que son del tenor siguiente: "El auto en que se revoque la prisión preventiva, de cesación de medidas de aprehensión, retención o incautación, el sobreseimiento provisional o definitivo, dictado por **el juez y las sentencias condenatorias y absolutorias serán obli-**

gatoriamente elevadas en consulta al superior, quien resolverá conforme a lo dispuesto en el Art. 401 del Código de Procedimiento Penal, previo informe obligatorio que emitirá el Ministro fiscal dentro del plazo improrrogable de 24 horas.- Si el proceso tuviese más de cien hojas, a este plazo se agregará un día más por cada cien hojas.- **El incumplimiento de esta disposición acarreará la destitución inmediata de los magistrados**, quienes serán reemplazados de conformidad con la ley".

La disposición transitoria de esta ley reformatoria dice lo siguiente: "Las consultas o revocatorias del auto de prisión preventiva, de cesación de medidas de aprehensión, retención e incautación por sobreseimiento provisional o definitivo, en todas sus formas y las sentencias condenatorias o absolutorias que actualmente se encuentren en trámite en las Cortes Superiores, deberán ser resueltas **en el plazo de 30 días desde la promulgación de la presente ley reformatoria. En caso de incumplimiento de esta disposición los magistrados serán sancionados de conformidad con la presente ley reformatoria**".

Uno de los procesos que más tarda en su sustanciación, por lo delicado del tema para jueces y fiscales, es precisamente el que se sigue por narcotráfico. Como la ley dispone que deben subir en consulta a la Corte Superior, el retardo es mayor. La reforma que acabamos de transcribir tiende a impedir a los magistrados un pronto despacho de las causas. Pero, nos asalta la duda cuando leemos la disposición transitoria. De la lectura del artículo único se corregiría que quienes tienen el plazo improrrogable de 24 horas para despachar son los Ministros Fiscales. Sin embargo, en la disposición transitoria se dice que aquellas causas que se hallan en trámite en las Cortes Superiores "**deberán ser resueltas en el plazo de 30 días desde la promulgación de la presente ley reformatoria**" y, en caso de incumplimiento, los Magistrados serían sancionados con la inmediata destitución. ¿A qué "Magistrados" se refiere la ley? Será a los señores Ministros Jueces de las Cortes?, Porque los Ministros Fiscales no resuelven nada, sólo dictaminan. ¿Debemos suponer, entonces, que los Ministros Fiscales tienen, desde la promulgación de la ley en adelante, 24 horas para informar y los Ministros de la Corte 30 días para resolver desde la promulgación de la ley? ¿Es decir que, pasados los 30 días, pueden tardar cualquier cantidad de tiempo en la tramitación y resolución de los procesos que ingresen para su despacho posteriormente? Una vez más, las reformas no se hacen de manera técnica. El legislador debe aclarar esta situación.

## OTRAS DISPOSICIONES: CREACIÓN DE JUZGADOS Y TRIBUNALES ADICIONALES.

La ley 04, en el Art. 2, dispone que, en el plazo de seis meses, deberán crearse en los distritos judiciales en donde fuere necesario, los juzgados y tribunales de lo penal que se requieran para que se despachen 400 causas anuales como máximo.

Casi seis años han transcurrido desde que se dictó la ley, no obstante, observamos que los procesos penales se acumulan en los fríos despachos judiciales. Cuatrocientas causas en el año son demasiadas para un funcionario que tiene que atender al público, disponer la práctica de las pruebas, estudiarlas, analizarlas y resolver.

Frente a este panorama ¿podemos decir que existe justicia en el Ecuador y que no se violan los derechos humanos?

**SANCIONES.-** La ley 04, además, en el art. 3, fija la sanción para los jueces que no cumplan con los plazos establecidos en los artículos 231, 251, 260, 271 y 324 del Código de Procedimiento Penal. La pena es pecuniaria, es decir, que se impone una multa equivalente al 50% del valor del salario mínimo vital, para las tres primeras veces y la destitución a partir de la cuarta quedando inhabilitado para reintegrarse a las funciones por *el* lapso de cinco años.

Corresponde al Presidente de la Corte Superior del respectivo distrito la imposición de estas sanciones, según lo dispone el inciso segundo del artículo que comentamos, sanción que deberá ser impuesta el mismo día que conozca del retardo, bajo su responsabilidad personal y pecuniaria.

También me pregunto cuántos jueces ha sido sancionados, por lo menos, monetariamente, por haber transgredido esta norma. Si los preceptos legales se aplicaren tal cual están, otra sería nuestra situación. Por ello, no me canso de repetir que en este país poseemos leyes suficientes y eficaces. El problema no está en las disposiciones legales, sino en quienes las aplican o en quienes debieran aplicarlas.

Por ello, me permito hacer las siguientes recomendaciones:

### RECOMENDACIONES:

1.- Difundir *el* texto de la ley 04 y de las reformas al Código de ejecución de Penas y Rehabilitación Social y a la ley de sustancias estupefacientes y sicotrópicas.

2.- Preocuparse por la suerte de los detenidos.

3.- Exigir la aplicación de la ley, tanto a nivel de los jueces y tribunales, como de los directores de los centros carcelares.

4.- Velar por la creación de juzgados y tribunales penales.

5.- Obtener la reglamentación respectiva, a fin de que todo estudiante de derecho, antes de alcanzar el título profesional que le permita ejercer en los tribunales y juzgados de la República, debe resolver, cuando menos, un caso penal.

(\*) **NOTA:** El numeral 8 del Art. 24 de la Constitución Política intenta terminar con la prisión indefinida al disponer que la prisión preventiva no debe exceder de seis meses en los casos de delitos sancionados con prisión, ni de un año en los casos de delitos reprimidos con reclusión.

Además, en la disposición transitoria número veintiocho se ordena la libertad de los detenidos por delitos reprimidos con prisión que hubieren permanecido encarcelados por más de un año, sin sentencia.